

JUZGADO DIECISÉIS (16) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Carrera 57 Nº 43-91, Edificio Sede de Despachos Judiciales CAN, Piso 4° Correo electrónico: admin16bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono: 5553939, ext. 1016

Bogotá, D.C., 24 de mayo de 2019

PROCESO:

2500-23-15-000-2005-02065-00

DEMANDANTE:

MARÍA PATROCINIO ALFONSO MORENO Y OTROS

DEMANDADO:

FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA COMPARTIR Y OTROS

Teniendo en cuenta el informe secretarial que antecede, procede el Despacho a decidir sobre los tres (3) recursos de reposición y en subsidio de apelación presentado oportunamente por los abogados Tito Pio Cuevas Neira¹, Diego Sadid Losada Rubiano² y Oswaldo Álvarez Amaya³ contra la providencia mediante la cual se tuvieron por integrados al segundo grupo de beneficiarios a las personas allí relacionadas y fueron excluidos del pago de la indemnización otro grupo de personas que no cumplieron los requisitos indicados en los fallos de instancia, (fls. 502-506, C. Nº 7).

I. <u>DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS CONTRA EL AUTO DEL 1º DE FEBRERO DE 2019</u>

1. Abogado Tito Pio Cuevas

Solicita la revocatoria parcial del auto recurrido respecto de los señores Jaqueline Báez Zambrano y Nelson Enrique Parra Cruz argumentando que se adhirieron en tiempo al proceso, tal como se evidencia en el expediente reposan sendos contratos de cesión de derechos litigiosos de las personas que en su momento hicieron la venta de los inmuebles a los mismos, (fls. 512-514, C. Nº 7).

2. Abogado Diego Sadid Lozano Rubiano

Sostiene que los requisitos indicados en la sentencia de primera instancia, el Despacho estableció únicamente para efectos del pago y no para hacerse parte del grupo de

¹ En el recurso sostuvo que representa los intereses en particular de la señora Jaqueline Báez Zambrano y del señor Nelson Enrique Parra Cruz, (fls. 512-514).

² Manifiesta que representa el interés de todos sus poderdantes excluidos en la decisión adoptada mediante auto del 1º de febrero de 2019, (fls. 516-519).

³ En el recurso indica que presenta la impugnación en favor de las personas allí relacionadas, (fls. 520-527), sin embargo, a folios 546-548 reposa un memorial en el que un grupo de personas manifiestan desistir del recurso interpuesto por el apoderado referido.

beneficiados. Por lo anterior, estima que la Defensoría del Pueblo es la entidad obligada a exigir los documentos enunciados en los fallos de instancia para realizar el pago correspondiente, pero no el Despacho.

Expone que el hecho de no haber adquirido directamente el inmueble es un requisito que no se encuentra contemplado en las sentencias proferidas en primera y segunda instancia, por tanto es una carga que no debe ser impuesta a los accionantes ni al grupo de adheridos.

Finalmente, expresa que la comunidad accionante durante todo el desarrollo del proceso entendió que el único requisito para acceder a la indemnización era ser propietario actual de uno de los inmuebles afectados, calidad que acreditaron con el certificado de libertad y tradición allegado al expediente por lo que los demás requisitas (escritura, poder, etc.), deben ser aportados a la Defensoría del Pueblo para realizar los pagos a que haya lugar, (fls. 516-519, C. № 7).

3. Abogado Oswaldo Álvarez Amaya

Aduce que no obstante haber decretado el Despacho la admisión de nuevos integrantes al grupo de beneficiarios de la indemnización, con posterioridad decidió excluir a distintos peticionarios por no haber presentado copia de la escritura pública pese a que fue allegado el respectivo certificado de tradición y libertad de los inmuebles.

Sostiene que los certificados de tradición y libertad no fueron tachados de falsos, ni se hizo algún reparo al respecto, por lo cual gozan de autenticidad y legalidad, la cual tampoco fue desvirtuada por el Juzgado. Por lo anterior, estima que el certificado es el documento válido para establecer la condición de propietario, inclusive con mayor valor probatorio que la escritura pública.

Indica que, la Ley 472 de 1998 en sus artículos 55 y numeral 2º, art. 61, no exige como requisitos taxativos para la inclusión de nuevos integrantes la presentación de escrituras que acrediten la propiedad, sino que basta con el solo escrito que contenga la intención de hacerse participe del grupo beneficiario de una indemnización en calidad de adherido.

Manifiesta que no existió por parte del Despacho algún requerimiento verbal o escrito (providencia) que indicara que pese a haber sido adherido al grupo en tiempo, debían presentar igualmente en un término determinado los documentos indicados en la sentencia, requisitos que, insiste, no se encuentran contemplados en la Ley 472 de 1998, en consecuencia, tales exigencias vulneran el debido proceso por aplicación indebida de la norma sustancial. Por lo anterior, considera que el Juzgado desbordó sus competencias en tal sentido.

Finalmente, argumenta que la sentencia de primera instancia en los numerales 6º y 7º dejó abierta la posibilidad que los nuevos integrantes del grupo acreditaran el cumplimiento de los requisitos ante la Defensoría del Pueblo, en un momento posterior cuando dicha entidad cite a las personas para realizar los pagos a que haya lugar, (fls. 520-527, C. Nº 7).

Demandantes: María Patrocinio Alfonso Moreno y Otros

4. ACTUACIONES PROCESALES DEL RECURSO

Por la Secretaría del Juzgado se dio trámite a los recursos de reposición de conformidad con los artículos 110 y 318 del C.G.P., mediante fijación en lista de un (01) día, que, ordenó correr traslado del mismo por el término de tres (03) días, para que las partes realizaran las manifestaciones que estimaran pertinentes, (fl. 549, C. Nº 7).

OPOSICIÓN A LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN

Vencido el término del traslado de los recursos, las partes guardaron silencio, (fl. 550, C. № 7). Visto lo anterior, pasa el Juzgado a pronunciarse sobre los recursos interpuestos, previa las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Conforme a los artículos 50^4 y 51^5 de la Ley 472 de 1998, este Despacho es competente para resolver los recursos de reposición que se eleven en el marco de una acción de grupo.

2. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS

El artículo 68 de la Ley 472 de 1998, establece que: "en lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento Civil", ahora Ley 1564 de 2012 que contiene el Código General del Proceso, en adelante C.G.P., por lo tanto, esta normatividad será la llamada a rellenar aquellos vacíos procedimentales que sean advertidos en el marco de esta acción constitucional.

En desarrollo de lo anterior, tenemos que el artículo 318 del C.G.P. dispone sobre el recurso de reposición que "(...) salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen", es decir que, el recurso de reposición interpuesto por los abogados Tito Pio Cuevas Neira, Diego Sadid Losada Rubiano y Oswaldo Álvarez Amaya contra la providencia proferida por este juzgado de fecha 1º de febrero de 2019 que integró el segundo grupo de beneficiarios de las sentencias de instancia y decidió excluir a un grupo de personas por no cumplir con los requisitos establecidos en las mismas es procedente, por lo cual el Despacho lo resuelve de fondo, bajo los siguientes argumentos:

⁴ ARTICULO 50. JURISDICCION. La jurisdicciór de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas e da actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas.

⁵ ARTICULO 51. COMPETENCIA. De las acciones de grupo conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial al que pertenezca el juez de primera instancia. Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado o demandante, a elección de éste. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.

1. Coinciden los apoderados de las partes en expresar que la Ley 472 de 1998, en su artículo 55, para la adhesión al grupo de beneficiarios de una indemnización producto de la sentencia que se profiera dentro de una acción de grupo exige únicamente que los eventuales interesados manifiesten su voluntad mediante la presentación de un escrito en el cual se indique: i) nombre, ii) daño sufrido, iii) origen del mismo y iv) el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo.

Al respecto, la norma en comento dispone:

"ARTICULO 55. INTEGRACION AL GRUPO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE. Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas.

La integración de nuevos miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la indemnización contenida en ella.

Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a solicitud el interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo"

Sobre el particular, el Despacho estima que las alegaciones presentadas por los recurrentes en este sentido son acertadas, por cuanto la norma en comento no exige requisitos adicionales a los allí indicados, por lo tanto, realizar otras exigencias distintas a las descritas implica imponer cargas que no deben soportar los eventuales beneficiados de las decisiones de instancia, cuando es la misma ley la que diseñó un procedimiento ágil y sumario para lograr la adhesión al grupo.

2. En este momento, es necesario traer a colación el artículo 11 del C.G.P., que establece que al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, esto, en atención a los principios constitucionales y generales del derecho procesal, en consecuencia, se tiene que la norma en cita exige que el operador judicial "... se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias..."

Congruente con lo anterior, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que por disposición del artículo 228 Superior, las formalidades no deben convertirse en un obstáculo para efectivizar los derechos sustanciales, sino que, por el contrario, deben estar encaminadas

a lograr su realización o materialización. Significa lo anterior, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Así lo sostuvo en la Sentencia C-029 de 1995⁶ al expresar que

"(...) "Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia "prevalecerá el derecho sustancial", está reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio (...)"

En esa óptica garantista, la Corte Constitucional desde el año 2001, al proferir la sentencia T-1306, comenzó a solidificar esta garantía de prevalencia del derecho sustancial en el ámbito judicial, esto lo hizo a través de la fundamentación y consagración de la causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada *"defecto procedimental por exceso ritual manifiesto"*, la cual sería desarrollada en los años siguientes por medio de las sentencias T-1123 de 2002; T-950 de 2003; T-892ª de 2006; T-1091 de 2008; T-264 de 2009; T-386 de 2010; T-429 de 2011; T-113 de 2012; T-363 de 2013; T-104 de 2014; T-201 de 2015; T-247 de 2016; T-024 de 2017; T-031 de 2018 y, T-113 de 2019, entre otras.

- 3. Sin embargo, frente a las réplicas de los apoderados de las partes, en ejercicio de los recursos de reposición, que estiman que lo exigido por el Despacho son formalidades que no se encuentran detalladas en la ley, considera esta operadora que no se trata de meras exigencias, sino que obedece al uso de la potestad establecida en el numeral 3º del artículo 43 del C.G.P., según el cual el Juez en uso de los poderes de ordenación e instrucción tiene la facultad de "...ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten...", para direccionar el trámite de los asuntos que se ponen en su conocimiento, cuya finalidad no es otra que decidirlos de manera eficiente y con observancia del debido proceso e igualdad que le asiste a las partes intervinientes dentro del marco de los principios que guían toda clase de procesos.
- 4. Así las cosas y pese a que en principio el Despacho en la providencia recurrida decidió excluir del grupo de beneficiarios a los propietarios señalados en los numerales 2º y 3º de la referida providencia por no aportar la totalidad de los documentos señalados en la sentencia de primera instancia para acceder a la indemnización allí descrita (fls. 502-506), lo cierto es que conforme lo indica de manera específica el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el precedente jurisprudencial señalado, los interesados solo debían manifestar su intención de hacerse parte del grupo mediante escrito que contuviera: (i) su nombre, (ii) el daño sufrido, (iii) el origen del mismo y, (iv) el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo y así lo cumplieron. Por lo anterior, el Juzgado repondrá la decisión cuestionada en este punto.

⁶ M.P. Jorge Arango Mejía.

- 5. En relación sobre el momento y ante quien deben aportarse los documentos para acreditar los requisitos exigidos por las sentencias de instancia para acceder a la indemnización ordenada, el Despacho pone de presente que en lo pertinente la sentencia proferida por este Juzgado señaló:
- "(...) los 26 integrantes del grupo demandante y <u>para efecto del pago</u> de los derechos aquí reconocidos, deberán acreditar ante el <u>Defensor del Pueblo</u>, como administrador de dicho Fondo, los siguientes requisitos: (1) copia del poder conferido a su representante o apoderado judicial para el presente proceso y; (2) copia auténtica de la escritura de compraventa a la Fundación Compartir y del correspondiente certificado de libertad y tradición que los acredite como propietarios.

Los interesados en las indemnizaciones correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentarse en los términos del artículo 55 de la Ley 478 de 1998, deben cumplir los requisitos establecidos en el párrafo anterior, numeral 2º, acompañada de la respectiva petición y los demás requisitos del artículo 61 ibídem concordante con el numeral 2 del artículo 65 de la misma Ley (...)" (fl. 1767, C. Nº 4).

Como se observa, la sentencia fue clara en indicar que los requisitos por ella exigida deben ser acreditados ante el Defensor del Pueblo en su calidad de administrador de los recursos del Fondo para la Defensa e Intereses Colectivos, en los términos y para los efectos del artículos 55, 61 y 65 de la Ley 472 de 1998 (fl. 1767-1768), para el pago y no para adherirse a los efectos de las sentencias proferidas en el sub examine.

Así las cosas y como lo sostuvieron los recurrentes, los documentos exigidos antes citados, son requisitos que deben acreditar los beneficiarios del grupo ante la Defensoría del Pueblo, conforme lo dispone el artículo 65 de la Ley 472 de 1998, para poder acceder al pago de la indemnización pretendida en la demanda constitucional.

- 6. Ahora, sobre el argumento expuesto por la Defensoría del Pueblo en el memorial que reposa a folios 480-484 del C. Nº 7 en sentido que dicha entidad no ejerce funciones jurisdiccionales, advierte el Despacho que le asiste razón, toda vez que el legislador estableció en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 los requisitos para adherirse al grupo de beneficiarios y esta disposición fue citada en las sentencias de instancia. Teniendo en cuenta lo anterior y al haber sido cumplidos por las partes los requisitos señalados en la mencionada norma, es ante esa entidad donde los interesados deben allegar los documentos señalados en las sentencias para reclamar el pago de la indemnización a que tienen derecho.
- 7. De otra parte, el abogado Tito Pio Cuevas, en representación de los demandantes Jaqueline Báez Zambrano y Nelson Enrique Parra Cruz, presenta recurso de reposición en razón a que sus poderdantes fueron excluidos del pago de la indemnización, con el argumento que no adquirieron el inmueble directamente en la fundación COMPARTIR.

Al respecto encuentra esta sede judicial que le asiste razón al profesional del derecho ya que teniendo en cuenta los argumentos expuestos a lo largo de esta providencia los citados



demandantes, se adhirieron al grupo en los términos legalmente establecidos, motivo por el cual, deben acreditar el derecho que le asiste ante El Fondo Para la Protección de los Derechos E Intereses Colectivos, entidad encargada del pago de perjuicios ordenados en la sentencia.

- 8. En el mismo sentido, los señores Edgar Albeiro Cruz Cifuentes, Gladys Liliana Rincón y José Evelio García Orjuela, deben acreditar su derecho ante la mencionada entidad, teniendo en consideración que también se adhirieron al grupo en los términos legalmente establecidos y teniendo en cuanta que se encuentran en situaciones fácticas similares a la de la señora Jaqueline Báez Zambrano y el señor Nelson Enrique Parra Cruz, por no haber adquirido de manera directa el bien inmueble objeto de la presente indemnización a la Fundación Compartir.
- 9. Finalmente, sobre el desistimiento presentado por algunos de los propietarios de los inmuebles objeto de la presente demanda, visible a folios 546 a 548 del expediente, el despacho no hará pronunciamiento al respecto, toda vez atendiendo a las consideraciones y a la normatividad expuestas en esta providencia, la decisión de fecha 1 de febrero de 2019 se repondrá, en el sentido de integrar al segundo grupo de la beneficiarios a todas las personas que en la oportunidad legalmente establecida por las normas que regulas la materia, presentaron solicitud de adhesión a los efectos de los fallos proferidos en el presente asunto.
- 10. Teniendo en cuenta lo expuesto y en aplicación del precedente jurisprudencial anotado en párrafos anteriores, así como de los principios generales del derecho aplicable a toda clase de actuaciones judiciales, el Despacho arriba a la convicción que la providencia atacada se debe reponer y en su lugar se pronunciará sobre la conformación del grupo de beneficiarios de la presente acción constitucional.

El recurso de apelación

Respecto del recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria contra el auto a que se ha hecho referencia en la presente providencia, el Juzgado resuelve sobre su procedencia en los siguientes términos:

El artículo 321 de la Ley 1564 de 2012, dispone las providencias susceptibles del recurso de apelación, así:

"ARTÍCULO 321. PROCEDENCIA. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad.

También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

- 1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas.
- 2. El que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros.
- 3. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
- 4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.
- 5. El que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva.
- 6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva.
- 7. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.

- 8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.
- 9. El que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano.
- 10. Los demás expresamente señalados en este código."

La anterior disposición contempla las providencias apelables y, entre ellas no se encuentra la dictada en el auto recurrido, el cual por lo tanto, no es susceptible del recurso de apelación, sino del recurso de reposición, de conformidad con el artículo 318 *ibídem*, que establece:

"salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen (...)".

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la providencia recurrida es susceptible del recurso de reposición, no procede contra ésta el recurso de apelación. Por lo tanto, se deniega por improcedente, el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 1º de febrero de 2019 ya referido, por las razones expuestas.

Por último, el Juzgado pone de presente que la Defensoría del Pueblo – Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos antes de hacer efectivo el pago de la indemnización a favor de las personas que cumplieron los requisitos para ser beneficiarios, deberá tener en cuenta las directrices señaladas en las sentencias de primera y segunda instancia, así como las distintas providencias judiciales que fueron expedidas en desarrollo de este proceso sobre la materia.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Dieciséis (16) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.,

RESUELVE:

<u>PRIMERO</u>: REPONER el auto del 1º de febrero de 2019, por las razones expuestas en esta providencia.

<u>SEGUNDO</u>: INTEGRAR como segundo grupo de beneficiarios a las personas que se señalan a continuación, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia:

NOMBRE	MATRÍCULA	CASA
LUIS ARMANDO MORENO ALDANA - CARMEN EMILCE CACERES MESA	50S-40430410	64
MARIELA ALARCON ROMERO - MANUEL GUZMAN MENDOZA	50S-40430422	95
LUZ MYRIAM PEREZ CENDALES	50S-40430404	58
LUZ MARY MARTINEZ CRUZ - MARÍA CRISTINA SANCHEZ MARTINEZ	50S-40430424	97
JACQUELINE DIAZ ROJAS	505-40430408	62
MADGRET VIVIANA VEGA HERNANDEZ	50S-40430413	67
GLADYS GARCIA ECHEVERRY - MARTHA INES ECHEVERRY	50S-40430428	101
MARTHA OLIVIA RINCON QUIÑONEZ	50S-40430412	66

Demandantes: María Patrocinio Alfonso :Moreno y Otros

AMALIA MENDOZA DOMINGUEZ	50S-40419542	75
EDILBERTO PEREZ AGUDELO	50S-40419541	74
BLANCA NELLY JIMENEZ RUIZ	50S-40425915	223
CARLOS JESUS ANGARITA JURADO - NIDIA MARCELA BELTRAN	50\$-40425895	185
SANDRA PATRICIA PEREIRA HERNANDEZ	DOS-40425866	138
LIGIA MUETE MARTINEZ	50\$-40430427	100
HECTOR LISANDRO TORRES SUAREZ	50S-40430407	61
AMALFY ACERO AMAYA	50S-40425869	141
SANDY MARITZA ARDILA HERNANDEZ - YESID GILBERTO MUÑOZ NEIRA	FOC 40400434	0.4
GLORIA MARINA BAQUERO CAMARGO	50S-40430421 50S-40419601	94
MARÍA CRISTINA SERRANO DIAZ - JHON DAVID GARCIA TORRES	50S-40419511	4
LUZ MARINA CAMELO RIVERA	50S-40419517	10
MARIA CECILIA RODRIGUEZ CARDENAS - OLGA ROSA RODRIGUEZ CARDENAS	50S-40430378	12
GILMA LUCIA MORA BERNAL - JUAN JOSE PIRAQUIVE TRIVIÑO	50S-40430381	15
MARIA HELENA PEREZ MORENO - DAVID CASTAÑEDA ALZATE	50\$-40430382	16
FEDERICO PINZON GUERRERO	50S-40430387	21
MARIA TRANSITO SALGADO DE PORTELA - PEDRO JOSE PORTELA ROJAS	50S-40430392	26
ANGELA SUJEI AGUILAR - NESTOR EFREN RICAURTE LOPEZ	50S-40419524	37
CARMENZA LARROTA TRUJILLO - MARCO TULIO AVILA PINILLA	50S-40419525	38
SANDRA MILENA ARIAS HERNANDEZ - JORGE GUERRERO RUIZ	50S-40430405	59
TERESA VILLAFAÑE DE LAITANO		60
LUIS FELIPE LEIVA PIRABAN	50S-40430411	65
ANA MATILDE GALVIS - JOSE ALBERTO GASCA	50S-40430415	69 ·
SANDRA ROMELIA PUENTES RAMIREZ - JOSE ARMANDO ARIAS BALTRAN	5-0S-40419545	78
DORIS RODRIGUEZ BUSTOS	50S-40419552	85
DIANA MARCELA DUCUARA VERJAN - JEISSON ALEXANDER PARDO ROMERO	50S-40419555	88
EDILMA MENDEZ ALBARRACIN - MARCOS PARDO DELGADO	50S-40430418	91
RUTH DEISY RIOS - ALBEIRO LONDOÑO POLANIA	505-40430420	93
ROSALBINA VERGARA	50S-40430433	106
MARLEN EPIMENIA RODRIGUEZ - JOSE DAVID DURAN PEREZ	50S-40430434	107
WILSON ENRIQUE MOLINA PINTO	505-40419558	111
EMILSE BASTO TAFUR	508-40419561	114
ROSA ALINA PENCUE - ELVER ARIZA VELASCO MARIA INES SALINAS PERDOMO	50S-40419563 50S-40419573	116
AMANDA LUCIA BOHORQUEZ SANABRIA - EDILBERTO ALARCON JIMENEZ	50S-40425858	130
VICTOR MANUEL CARRILLO LINARES -CLARA PATRICIA PUENTES PRADA	50S-40425863	135
YUNI ESMERALDA PALACIO	50S-40425868	140
ROSA HERMINDA HERRERA - NORBERTO DIAZ MOLANO	50S-40419580 	153
NUBIA ESPERANZA GONZALEZ RIVERA	50S-40419587 	160
CARMEN ELVIRA NOVOA PABON	5:0S-40419592	165
SOL ANGEL GUACARI ROCHA - ELVER PRIETO GUACARI	50S-40425885	175
LUZ YENIT CAMACHO - JIMMY BERNAL VARGAS	50S-40425911	219
MANUEL ANTONIO MARTINEZ DUARTE - CARMEN LILIA PARRA PRIETO	50S-40430398	52
CARLOS ARTURO MEDINA LARROTA - SANDRA PATRICIA PEREZ OLAYA	50S-40419615	228
MARIA ELOISA TORRES RAMIREZ	. 50S-40425878	168
GLADYS JIMENEZ SANCHEZ - LUIS GERMAN PINTO PARRA	50S-40425880	170
SILVIO HERNANDO JOJOA - CLARA ISABEL VILMA URREGO BARRETO	50S-40425897	205
	50S-40430393	27
MARTHA CECILIA PADILLA VELANDIA	=	
LIBIA YANETH RAMIREZ MARTINEZ	50S-40419605	198
BLANCA LIBIA MARTINEZ DE RAMIREZ	50S-40419589	162

LUZ ANGELA NAIZA AYAŁA	50S-40430396	30
SANDRA MILENA CAMACHO VARON - RAFAEL AN TONIO CAMACHO - FERNANDO		
GAMEZ FÜQUEN	505-40430383	17
JORGE HUMBERTO CASTRO GUZMAN	50\$-40430429	102
LUIS EDUARDO RINCON, LUIS ORLANDO RINCON GORDILLO. ROSA DEL CARMEN	V V V	
MEDINA MEDIN	50S-40425881	171
JANETH ALFEREZ MONDALVE	50S-40419602	195
ALEIDA RODRIGU!	50S-40419577	150
CELINA QUINTERO HERRERA	50S-40425903	211
MERY YOLANDA MEDINA NAJAR - EDISON GIOVANNI IGLESIAS AVILA	50S-40430425	98
RAMIRO CASTELLANOS MORA	50S-40430414	68
MARIA DEL SOCORRO RAMOS OVIEDO	50S-40430432	105
SANDRA BIBIANA RINCON	50S-40425870	142
LIGIA CHAUX MUÑOZ	50S-40419582	155
ALBA CHAUX MUÑOZ	50S-40419567	120
NELSON TEJEDOR ESCALA - MARISOL ROMERO GUERRERO	50S-40419566	119
SANDRA YANNETH RODRIGUEZ ANGARITA - ELVA GEORGINA ANGARITA MELENDEZ	508-40425909	217
ALEXIS GAMBA GUIZA - GABRIELINA GUIZA GUIZA -OLGA MIRIAN GUIZA GAMBOA	50S-40425860	132
FREDY RICARDO RINCON MARTINEZ	50S-40419598	191
PRAXEDIS BORJA ARAGONES	50S-40425882	172
ANA ISABEL ÁLVAREZ PEYES	505-40425889	179

JHON FABER MERCHAN AROCA - DIANA MILDRED GARCIA VALENCIA	50S-40425913	221
LEYDI MARGARITA LOZANO - JHON FREDY ACOSTA BELTRAN	50S-40425910	218
CARMEN ROSA SALDARRIAGA MERIDA	50S-40419617	230
CARLOS ARTURO MONSALVE SANCHEZ - DULFAY FORERO RIVERA	50S-40425861	133
LINA MARCELA TURMEQUE ROJAS	50S-40425907	215
OLGA MARINA RODRIGUEZ CLAVIJO	50S-40425894	184
ROSA HELENA TOVAR CHARRY	50S-40419591	164
CRISTIAN FELIPE BARRAGAN FERRO	50S-40425896	204
GLORIA NUBIA AYALA	50S-40419619	232
JOSE FRANCISCO CUESTA ROJAS	50S-40419613	226
NIDIA YANETH PLAZAS GRANADOS	505-40419521	34
MARIA EDILMA RODRIGUEZ ARIZA - JOSE RAUL ESCAMILLA QUITIAN	50S-40425914	222
EDNA JAZMIN CRUZ PAVA - JHON ALVARO CAPELLA RUBIO	50S-40419523	26
MARIA ISABEL CAICEDO DIAZ	50S-40419586	159
MYRIAM STELLA GONZALEZ DIAZ	50S-40419530	43
CLAUDIA PATRICIA PIÑEROS GANTIVA	50S-40430435	108
FELIX PILLIMUE PECHENE	50S-40419570	123
NANCY CACERES MESA - ALFREDO HERNANDO PONTON BEDOYA	505-40425893	183
LUZ DARY MAHECHA NAVARRETE - VICTOR JULIO MORENO ALDANA	508-40425892	182
MAGDA YAMILETH RIVEROS GALINDO - JORGE FRANCISCO GOMEZ AVELLANEDA	50S-40430403	57
BLANCA CECILIA SANCHEZ PRIETO	50S-40425900	208
JORGE GUERRERO RUIZ - SANDRA MILENA ARIAS HERNANDEZ	50\$-40430405	59
MARIA NELLY ARAGON GARCIA - CARLOS EDAURDO MENDEZ LEMUS	50S-40425867	139
ELVIA RUTH PRIETO ROJAS	50\$-40425859	131
BLANCA CECILIA RODRIGUEZ URREGO	50S-40419518	31
JENNY PATRICIA ALBINO SUAREZ	50S-40430401	55

Demandantes: María Patrocinio Alfonso Moreno y Otros

MARTHA LUCIA BALLESTEROS BALLESTEROS	50S-40419603	196
MARGARITA HERNANDEZ - LUIS ALBERTO BUSTAMANTE GONZALEZ	50S-40430389	23
ORLANDO CASTIBLANCO NEUSA - MYRIAM YADIRA PEÑA MORA	50S-40419519	32
OLGA ISABEL GARZON MARTIN	50\$-40419547	80
JOSE SAUL RAMIREZ VALDERRAMA	50S-40430417	90
NIDIA GERTY ROJAS BELTRAN - GUERTHY BIASNED VELANDIA ROJAS		100
JOSE ARMANDO MENDEZ CELIS	50S-40430436	109
	50S-40419557	110
MARIA DEL CARMEN VANEGAS	50S-40419559	112
JORGE HERNAN ARIAS RODRIGUEZ	50S-40419560	113
NOHORA YANETH VEGA MARTINEZ - FELIX ANTONIO CALDAS HERNANDEZ	50\$-40419564	117
JUAN DOMINGO CASTRO CAMINO - ANA AGUEDITA TORRES PINZON	50S-40425856	128
GLORIA MARLEN FAJARDO CONTRERAS	50S-40425857	129
ROBERTO GARCIA ROJAS	50S-40425865	137
NANCY MILENA BERNATE QUINTERO	50S-40425871	143
EDISON RAFAEL LARA MIRANDA	50\$-40425872	144
LUZ MYRIAM GUERRERO MARTINEZ - RICARDO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	50S-40419585	158
ANA ROSA RICO DE CALVO	50S-40425888	178
ANA LUISA BARRERA HERNANDEZ	50S-40419593	186
MARBY JIMENEZ PEDRAZA	50S-40416989	187
SANDRA PATRICIA CASILIMAS CABRILES	. 50S-40425902	210
LILIA MARCELA TURMEQUE ROJAS	50S-40425907	215
JUAN KENNEDY URIBE MONTOYA	50S-40430400	54
MILA JUDITH TORRES BERNAL	505-40430377	11
JUAN PABLO MORENO RODRIGUEZ - CONSUELO AGUIRRE GRISALES	50S-40419513	6
MARTA PATRICIA SILVA GIL	50S-40425906	214
LUZ MARINA ENCISO	50S-40425908	216
YOLIMA ESPERANZA NIETO BOTIA - FLOR ELVA NIETO BOTIA	505-40430399	53
JOSE JAVIER CASTRO ZAMORA	50S-40419550	83
DAIRO JESUS GUERRERO CALDERON	50S-40419565	118
OLGA LUCIA GALARZA PINILLA	50S-40419562	115
LUZ ELENA OVALLE TORRES	50S-40419554	87
YAMIR ANTONIO PINZON ACUÑA		
LINDELIA CASTAÑO RODRIGUEZ	50S-40419551 50S-40419517	10
LUZ BETY GALEANO RODRIGUEZ	50S-40419517 50S-40419599	192
LUZ MARINA PADUA ARIAS ANGELICA MARIA CRITZ MALAVER	50S-40419526	39
ANGELICA MARIA CRUZ MALAVER	. 50S-40425888	178
LUZ EDILMA MENDIVELSO NUÑEZ	50\$-40419553	86
MARIA DEL PILAR BARACALDO CARVAJAL - LUIS ARTURO ARIZA SANTOYO	505-40430409	63

Demandantes: María Patrocinio Alfonso Moreno y Otros

JAQUELINE BÁEZ ZAMBRANO	50S-40430430	103
NELSON ENRIQUE PARRA CRUZ	50S-40419607	200
EDGAR ALBEIRO CRUZ CIFUENTES	505-40430390	24
GLADYS LILIANA RINCON	505-40430400	54
JOSÉ EVELIO GARCIA ORJUELA	50S-40425899	207

<u>TERCERO</u>: SE DENIEGA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN, impetrado por los apoderados de las partes contra el auto del 1^{o} de febrero de 2019, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

<u>CUARTO</u>: Ejecutoriado este auto, por la Secretaría del juzgado remítase en el término de la distancia copia de esta providencia al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MULLILIUM

CATALINA DÍAZ VARGAS

Juez

HJDG / VPAG

JUZGADO DIECISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA
Por anotación en ESTADO ELECTRÓNICO (artículo 201 de la Ley 1437 de 2011) se notificó a
las partes la providencia anterior, hoy 27 de mayo de 2019 a las 8:00 a.m.
Secretaria
Hoy 27 de mayo de 2019 se envió mensaje de texto de la notificación por ESTADO ELECTRÓNICO de la providencia anterior a los correos electrónicos suministrados, conforme al párrafo 3º, artículo 301 de la Ley 1437 de 2011.
Secretaria